

## JUZGADO NOVENO DE FAMILIA

Bogotá D. C., 18 de septiembre de dos mil veinte (2020)

Incidente de Desacato

Radicado 2020-0198.

Se procede por el despacho resolver el incidente de desacato propuesto por AMELIA PEÑA HERNÁNDEZ contra el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS EN COLOMBIA – COLFONDOS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

La accionante propone el incidente informando que las entidades accionadas no han cumplido con la orden judicial proferida en la acción de tutela incoada.

El despacho previo a la apertura del incidente dispuso librar comunicación al presidente de la Junta Directiva de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, superior jerárquico o la persona que haga sus veces, del presidente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, o quien haga sus veces; al presidente de COLFONDOS superior jerárquico o la persona que haga sus veces del gerente de COLFONDOS o quien haga sus veces, a fin de que manifestaran lo pertinente frente al cumplimiento del fallo de tutela de fecha 17 de junio de 2020.

Las entidades accionadas fueron notificadas sobre el inicio del presente trámite.

Se inició al trámite incidental dispuesto mediante auto calendado 25 de agosto del presente año y que le fuera notificado a las entidades incidentadas.

Mediante auto calendarado 8 de septiembre del presente año, se abre a pruebas el incidente conforme lo previsto en el artículo 127 numeral 3 del C. G. del P.

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES allega respuesta al presente incidente, informando sobre el cumplimiento del fallo de tutela.

Dicha manifestación fue puesta en conocimiento de la parte accionante, mediante auto del 8 de septiembre del presente año, quien guardó silencio.

### CONSIDERACIONES

*El artículo 52 del Decreto 2591 de 1.991 consagra que “La persona que incumpliere una orden de un Juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicios de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.*

De conformidad con lo expuesto, el desacato tiene como fundamento el incumplimiento de la orden dada por el juez dentro del trámite de la acción de tutela. Así pues, si aquella no se cumple el juez que profirió la orden de amparo, tiene la competencia para imponer la sanción correspondiente por desacato, previo el trámite incidental previsto en el artículo 127 del C. G. del P.

En palabras de la Corte Constitucional, corresponde entonces verificar si la orden impartida fue cumplida cabalmente, pues de ello depende no solamente la observancia del debido proceso, sino el efectivo acatamiento de las decisiones judiciales y, primordialmente la protección real de los derechos fundamentales tutelados a través del ejercicio de la acción.

En el caso concreto, la accionante solicitaba que le fueran otorgadas las incapacidades a que tenía derecho.

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES en respuesta a la acción de tutela, manifestó que dieron cumplimiento al fallo de tutela, siendo debidamente comunicado a la accionante.

De tal suerte que el incidente de desacato no está llamado a prosperar, lo anterior por cuanto si bien se tuteló el derecho de petición reclamado, las consideraciones que el despacho tuvo en cuenta para tutelar fue la no respuesta, entendiéndose por este hecho y de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 como ciertas las afirmaciones del actor.

En varios pronunciamientos de la Corte Constitucional frente al derecho de petición, entre ellas en Sentencia T-149/13 indicó que la “*Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva.*”

*Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado, especialmente el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los deberes de protección para los cuales fueron instituidas la autoridades de la República (C.P. art. 2). De ahí, que el referido derecho sea un importante instrumento para potenciar los mecanismos de democracia participativa y control ciudadano; sin dejar de mencionar que mediante su ejercicio se garantiza la vigencia de otros derechos constitucionales, como los derechos a la información y a la libertad de expresión. La garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”.*

Los anteriores razonamientos llevan a la conclusión que no se incurrió en desacato, evidenciándose que, si hubo respuesta, por tanto, nos encontramos frente a un hecho superado.

En efecto, en el mencionado fallo el despacho dispuso: “... *SEGUNDO: ORDENAR a la accionada FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS EN COLOMBIA, COLFONDOS que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha en la que sea notificada de esta decisión, REMITIR los ciclos para el periodo comprendido desde 1995/12 hasta 2009/07, requeridos para la solicitud de actualización de la información reportada previamente en SIAFP y trasladada en los archivos planos remitidos a COLPENSIONES en relación a los aportes cotizados durante la permanencia de la accionante en la Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS en cabeza de la AFP COLFONDOS, teniendo en cuenta que dichos archivos son necesarios en el proceso de actualización de la historia laboral de la accionante.*

*TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES que una vez obtenga la información solicitada en procedencia a COLFONDOS, deberá en el término de cinco (5) días siguientes, proceda a corregir y actualizar la historia laboral de la accionante. (...).*”

Al confrontar la respuesta dada por COLPENSIONES con lo ordenado en el fallo de tutela se tiene que con base a la documentación aportada llevaron a cabo el proceso de consulta y validación de sus bases de datos y procedieron a realizar la actualización para el periodo comprendido desde **1995/12 hasta 2009/07** los cuales fueron cotizados con los empleadores ZAPATA Y PUERTO LTDA, ULTRA LTDA, HUMANOS ASESORÍA EN SERVICIOS OCASI y OPCIÓN TEMPORAL Y CIA LIMITADA y MANUFACTURAS PALASO S A y cuyos ciclos fueron trasladados.

De igual manera aparece, conforme se anexo, la historia laboral actualizada y consistente en la cual se evidencia de manera detallada la información que hasta la fecha COLPENSIONES registra en relación a cada uno de los períodos de cotización reportados a favor de la accionante.

Así las cosas, y como quiera que se verifica conforme lo dicho anteriormente que las incidentadas habían dado cumplimiento a lo ordenado mediante el fallo de tutela, deviene para el juzgado DENEGAR el incidente de

incumplimiento incoado por la accionante por la existencia de un hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C.,

**RESUELVE**

**PRIMERO: DENEGAR** el incidente de desacato por la existencia de un hecho superado.

**NOTIFÍQUESE** a las partes por el medio más expedito. Déjense las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, identifying the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO RUIZ

JUEZ